

Universidad Nacional de La Matanza

Instituciones Constitucionales Argentinas

Profesores: Hernando Oliva y Alejandra Moledo.

**Alumnos: Lucente, María Juliana; Miranda, Gabriela Milagros; Nuñez, Camila
Alejandra; Simoes, Leandro Emanuel; Soro, Julieta Aylén.**

08/04/2017

Índice

Introducción.....	2
Relaciones del Estado argentino con los demás Estados y con las Organizaciones Internacionales	3
Los Tratados Internacionales (Artículos 31 y 75 inc. 22 y 24 de la CN)	6
Nacionalidad y ciudadanía (Artículo 75 inc. 12 de la CN; Principio Constitucional y régimen legal)	13
Régimen constitucional de los extranjeros y su expulsión	17
Conclusión	20
Bibliografía	21

Introducción

En el presente trabajo de investigación explicaremos de forma ordenada y completa el estudio realizado acerca de la unidad 5, las Instituciones Constitucionales Argentinas. Nos proponemos analizar cada uno de los temas que integran la unidad de forma clara y concisa, permitiendo así al lector una eficaz interpretación de los mismos.

A lo largo de del trabajo iremos desarrollando diferentes conceptos y términos que nos conciernen a todos llevando a cabo una lectura profunda y comprensiva de toda fuente y bibliografía consultada. En primer lugar, el siguiente análisis lo abordaremos de forma tal que explicaremos de qué forma se relaciona el estado argentino con los demás estados y organizaciones internacionales.

Introduciremos al lector en la definición y características de los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, así como también un análisis de los artículos propios de la Constitución Nacional que establecen y mencionan dichos tratados. La reforma llevada a cabo en la misma en 1994 insertó a la Argentina es un movimiento innovador, integrador y progresista respecto del tratamiento de los tratados internacionales referidos a los derechos humanos.

En segundo lugar, conceptualizaremos la nacionalidad y ciudadanía del hombre, los tipos de nacionalidad que existen, los modos de adquirirla, la Ley N°346 (Ley de ciudadanía y naturalización), así como también la pérdida tanto de la nacionalidad como de la ciudadanía, la unidad de nacionalidad, la doble nacionalidad, la nacionalidad por matrimonio, el Artículo 75, inc. 12 “in fine” de la Constitución Nacional y el principio constitucional y el régimen legal.

Por último, expondremos el régimen constitucional de los extranjeros y su expulsión del país.

Relaciones del Estado argentino con los demás Estados y con las Organizaciones Internacionales

Las relaciones exteriores de Argentina son gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

La promoción de los derechos humanos constituye un eje central de nuestra política exterior. Argentina trabaja conjuntamente con otros actores del sistema nacional e internacional de derechos humanos con el objeto de promover acciones que generen avances concretos en el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Desde el retorno de la democracia en 1983, la sociedad argentina ha buscado la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas y la erradicación de la impunidad. Esto se ha visto plasmado en un proceso de justicia que ha sido reconocido internacionalmente, y que ha permitido a la Argentina tener un rol relevante en la materia. En una de las contribuciones más importantes al orden jurídico internacional en este sentido, la Argentina presentó en el 2005 un proyecto que allana el camino para acceder al derecho a la verdad.

Así, el 20 de abril de 2005, la 59ª Sesión de la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la Resolución 2005/66 sobre “El Derecho a la Verdad”, con el copatrocinio de más de 50 países de diversas regiones del mundo. Fue la primera resolución presentada por la República Argentina ante la Comisión de Derechos Humanos, que fue luego seguida por sucesivas resoluciones que regularmente se adoptaron en el marco del Consejo de Derechos.

Con esta importante decisión en el principal foro internacional en materia de derechos humanos, se reconoce con carácter autónomo el derecho que asiste a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos así, como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad sobre dichas violaciones, las circunstancias en que las mismas se cometieron, y la identificación de los responsables.

En el año 2013 la Argentina presentó esta iniciativa por primera vez en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas. La misma fue adoptada por consenso.

Finalmente cabe destacar que nuestro país también presenta desde 2006 en el ámbito de la OEA resoluciones sobre este tema, procurando la elaboración de un informe que recoja el estado de situación del tema en la región.

De esta manera, ha impulsado en el ámbito universal la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el derecho a la verdad, y el uso de la genética forense.

Respecto a al uso de la genética forense, en marzo de 2009 y en octubre de 2010, la Argentina presentó dos resoluciones en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos (Resolución 10/26 y Resolución 15/5) enfatizando el rol de la genética forense en la identificación de los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y buscando promover un mayor involucramiento de la comunidad internacional en la temática mediante la consideración de “la posibilidad de redactar un manual que sirva de guía para la aplicación más efectiva de la genética forense, incluidas, según proceda, la creación y gestión voluntarias de bancos genéticos, con las debidas garantías”.

En seguimiento de estas resoluciones, la Argentina, conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja y un grupo de expertos, estableció un Grupo de Trabajo para la elaboración de la "Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Genética Forense en Investigaciones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario", con el objetivo de orientar la aplicación de la genética forense y la creación y gestión de bancos de datos genéticos en el marco de investigaciones relativas a la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario

En cuanto a las desapariciones forzadas, la Argentina ha presentado frente a las Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos y Asamblea General), regularmente una resolución sobre desapariciones forzadas, de forma conjunta con Francia y Marruecos.

Entre otros puntos, en dicha resolución se llama a los Estados a que consideren firmar y/o ratificar, según proceda, la Convención Internacional para la Promoción de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Cabe señalar que esta Convención surgió de una iniciativa de la Argentina y Francia y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Nuestro país la ratificó en 2007, habiendo asimismo aceptado la competencia del Comité previsto por la Convención.

Además la Argentina lidera junto con Francia una campaña internacional para lograr el mayor número de ratificaciones de dicho instrumento.

Asimismo, Argentina se ha manifestado en contra de cualquier atrocidad masiva, y ha desplegado una intensa acción para la prevención del genocidio. Consecuentemente, ha organizado foros regionales para la prevención del genocidio, y es miembro fundador de la red de Acción Global Contra las Atrocidades Masivas, y de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio. Esta última tiene por fin incorporar y desarrollar a través de la

capacitación y la cooperación regional, el concepto de educación en la prevención del genocidio y atrocidades masivas, como una prioridad en la agenda latinoamericana.

A nivel regional, Argentina apoya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ha sido un socio en el desarrollo de instituciones de derechos humanos desde el retorno de la democracia y un instrumento de mejora institucional al interior del Estado.

Nuestro país también participa activamente en las reuniones de derechos humanos que tienen lugar en el ámbito de UNASUR y del MERCOSUR, y es sede del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercado Común.

Los Tratados Internacionales

Un tratado internacional es un acuerdo voluntario entre sujetos de derecho internacional, es decir aquellos que poseen un conjunto de normas jurídicas internacionales que los regulan, y está destinado a producir determinados efectos jurídicos, ya sea crear una obligación, resolver una ya existente o modificarla.

Tiempo atrás se decía que un tratado era un contrato entre dos o más Estados, pero estos ya no se hacen solo entre Estados, sino que pueden intervenir nuevos sujetos de derecho internacional.

En el primer caso, los tratados que se celebren están regulados por la **Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969**. Dicha convención establece en su Art. 2 que:

“Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;”

Esto quiere decir que sus disposiciones son aplicables sólo a *tratados por escrito entre Estados* y quedan excluidos de la definición antes mencionada aquellos que no cumplan con estas condiciones. No obstante, la misma Convención establece que el hecho que no se aplique a otro tipo de acuerdo, no quiere decir que el valor jurídico de los mismos se vea afectado.

En el caso de los tratados en los que una de sus partes es un nuevo sujeto de derecho internacional, la regulación está a cargo de la **Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986**.

Esta convención intenta cubrir el vacío legal dejado por la anterior convención de 1969 en cuanto a este tipo de acuerdos. Fue sancionada y promulgada en nuestro país en 1990 (Ley 23.782). Tal como explicamos anteriormente, dicha convención establece en su Art. 1 que:

La presente convención se aplica:

a) A los tratados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, y

b) A los tratados entre organizaciones internacionales.

A su vez, también existe el concordato con la Santa Sede. Este es un tratado donde una de las partes es la Santa Sede, es decir, el Estado independiente en donde reside el Papa, el Vaticano.

Nuestra Constitución reconoce cuatro clases de tratados (*Art. 75, inc. 22*):

1. Tratados sobre Derechos Humanos:

- Con jerarquía Constitucional: son los 11 tratados en el 2do párrafo del inciso 22 del Art. 75, más la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad y la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
- Sin jerarquía Constitucional: para tenerla necesitan la aprobación del Congreso y luego el voto de 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Si no logran tener jerarquía Constitucional, de igual forma tendrán jerarquía superior a las leyes.

2. Tratados que no son sobre Derechos Humanos: de igual manera tienen jerarquía superior a las leyes.

3. Tratados de integración: (*Art. 75, inc. 24*) Estos tratados de integraciones supranacionales o supraestatales son sobre integración económica y no sobre derechos humanos, por ende no pueden tener jerarquía constitucional pero tienen jerarquía superior a las leyes. Se deben respetar la reciprocidad, la igualdad, los derechos humanos y el orden democrático.

- Pueden ser de dos clases:
 - Celebrando entre Estados de Latinoamérica. Para su aprobación se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
 - Celebrando con otros Estados. Para su aprobación se sigue 2 etapas:
 - a) El Congreso con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada cámara, declarara la conveniencia de la aprobación del tratado.
 - b) Pasados 120 días desde esa declaración, podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

4. **Tratados de Provincias con otros Estados:** son inferiores a las leyes.

Los tratados con jerarquía Constitucional (*Art. 31 de la CN*) tienen límites en las condiciones de su vigencia, es decir, con las reservas que haya hecho la Argentina en su momento. A su vez, no pueden derogar artículos de la 1era parte de la Constitución Nacional (parte dogmática). Por lo tanto, son complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional. Algunos autores sostienen que ante una contradicción entre los tratados y la misma, prevalece la Constitución si se trata de sus primeros 35 arts, otros establecen que prevalecen los Tratados y otros dicen que se debe tener en cuenta cuál favorece más a los derechos humanos.

Gestión de los tratados

Nuestro derecho constitucional establece que los tratados pasan por las siguientes etapas para ser celebrados:

1. **Negociación** (Poder Ejecutivo): en esta primera etapa se concretan los términos del tratado. Esta etapa es la más larga, puede durar varios años realizar un texto definitivo que satisfaga a las partes. Se determina el objeto, fin, redacción y contenido del tratado.
2. **Firma** (Poder Ejecutivo): en esta segunda etapa el Presidente de la Nación lo firma.
3. **Aprobación, desaprobación parcial o rechazo del tratado** (Congreso): lo hace el Congreso a través de una ley (teniendo que ser aprobada por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara; Art. 75, inc. 22).
4. **Ratificación en sede internacional** (Poder Ejecutivo): el Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado, es decir, el Presidente manifiesta someterse a ese tratado y recién aquí el Estado está obligado por dicho Tratado.

Una etapa no obliga a cumplir la siguiente. A su vez, existen otras modalidades tales como la adhesión de un Estado a un tratado sin haberlo negociado o firmado. El Estado adherente se incorpora al tratado negociado y firmado por otros Estados. La adhesión es una figura frecuente en tratados cuyos Estados signatarios los dejan *abiertos* para que otros se incorporen a ellos posteriormente.

El acto de celebración de un tratado requiere la concurrencia del Presidente y el Congreso. Tanto el acto presidencial por el que concluye y suscribe un tratado, como el

acto del Congreso por que se aprueba o desecha un tratado concluido, son actos de naturaleza o contenidos políticos.

Para denunciar un tratado, es decir, para desvincularse internacionalmente del tratado, el Poder Ejecutivo debe hacer la denuncia y el Congreso debe aprobarla con dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Tipos de tratados

Los estados pueden clasificarse según diferentes puntos de vista:

1. Según la índole de sus participantes (*Art. 75, inc. 22*):

- **Tratado entre Estados.**
- **Tratado entre Estados y Organizaciones Internacionales.**
- **Tratado entre Organizaciones Internacionales.**
- **Concordatos con la Santa Sede.**

2. Según el número de Estados participantes:

- **Bilaterales:** aquellos que ligan a dos sujetos de derecho internacional.
- **Multilaterales:** concluidos entre más de dos sujetos de derecho internacional. A su vez este tipo de tratados se subdividen en: generales (que tiene vocación de universalidad) y restringidos (aquellos limitados a un número reducido de Estados por motivos diversos, ya sean militares, geográficos, económicos, etc.)

3. Según el objeto del tratado:

- **Tratados culturales, económicos, de navegación, sobre derechos humanos, políticos, comerciales, de paz, etc.**

4. Según el tipo de obligaciones creadas:

- **Tratados-ley:** establecen normas de aplicación general, son en los cuáles existen dos o más voluntades con un mismo objetivo.
- **Tratados-contrato:** aquellos en los que existen dos voluntades opuestas pero complementarias. Por ej.: el interés de un Estado en vender algo se complementa con el interés de otro de comprar lo que vende.

5. Según su duración:

- **Tratados de duración determinada.**
- **Tratados de duración indeterminada.**

6. Según el criterio para su participación:

- **Tratados abiertos:** aquellos que prevén la participación de contratantes que no han participado en la negociación, mediante la adhesión o la firma.
- **Tratados cerrados:** aquellos que permiten exclusivamente la participación de los negociadores y no prevén la incorporación de nuevos contratantes.

7. Según la forma de dar consentimiento para obligarse:

- **Tratados formales:** aquellos que se celebran por el Presidente de la República mismos que son aprobados por el Senado, los cuáles son elevados a la Ley Suprema.
- **Tratados simples:** aquellos que se celebran por el Presidente de la República y no se someten a la aprobación del Senado, son de carácter administrativo o ejecutivo.

Artículo 31 de la Constitución Nacional:

Todas las normas (constituciones y leyes provinciales, ordenanzas municipales, decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, etc.) deben respetar a la CN.

Este artículo trata 2 temas fundamentales:

1. Supremacía de la Constitución Nacional: este artículo nos indica que todas las normas (constituciones y leyes provinciales, ordenanzas municipales, decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, etc.) deben respetar a la Constitución, la cual está por encima de ellas.

Si una norma es contraria a la Constitución Puede ser declarada inconstitucional a través del control de constitucionalidad de las normas, a cargo del Poder Judicial

de la Nación. El art. 27 nos dice que el Gobierno no puede celebrar tratados que estén en contra de la Constitución.

2. Orden de prelación de las normas: este artículo indica la jerarquía entre:

a) El derecho federal y el provincial: el primero (integrado por la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los tratados internacionales) está por encima del segundo.

b) Constitución, tratados y leyes: en primer lugar está la Constitución, luego los tratados ratificados por nuestro país y por último las leyes nacionales. Aunque algunos autores consideran que los tratados con jerarquía constitucional están por encima de la CN. Pero la jerarquía entre Tratados y leyes debemos analizarla teniendo en cuenta la reforma de 1994.

- Hasta la reforma de 1994:

El Tratado debe estar incorporado al Estado, y para ello hay teorías:

a) Teoría de adopción: se necesita una ley que adopte, incorpore el tratado al derecho interno y lo ponga en vigencia: luego de esto, si hay oposición con una ley se aplicará la norma posterior.

b) Teoría de la bivalencia: alcanza con ratificar el tratado para que se incorpore al derecho interno. En el año 1992 la Corte opta por esta teoría en el fallo Ekmekdjian c/Sofovich: el Tratado, aprobado y ratificado, en las condiciones de su vigencia se aplica directamente. De esta forma le da operatividad a sus cláusulas.

- Desde la reforma de 1994

Hace una distinción: le da a los Tratados, Convenciones y Concordatos sobre derechos humanos aprobados y ratificados (y aquellos que se incorporan en el futuro), jerarquía constitucional. Si existen contradicciones entre la Constitución y uno de esos tratados:

a) Para algunos autores se aplica el Tratado.

b) Para otros se aplica la Constitución, basándose en que estos tratados son complementarios de ella porque no pueden modificar su parte dogmática.

Artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional:

Este inciso indica las atribuciones que posee el Congreso por las cuales puede aprobar o desechar tratados concluidos con las organizaciones internacionales, las otras

naciones y los concordatos con la Santa Sede. Además se vuelve a mencionar que los tratados y concordatos poseen jerarquía superior a las leyes.

También puede observarse la lista de Tratados de Derechos Humanos, allí se menciona que éstos poseen jerarquía constitucional, es decir, que se hallan en el mismo nivel jerárquico que la Constitución Nacional puesto que complementan los derechos y garantías que en ella se establecen.

Para que los demás tratados y convenciones sobre los DDHH puedan gozar de jerarquía constitucional, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Este tipo de tratados solo podrán ser anulados por el Poder Ejecutivo Nacional con la previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Artículo 75, inc. 24 de la Constitución Nacional:

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Nacionalidad y ciudadanía

Conceptos

La nacionalidad caracteriza a un hombre por el vínculo que lo une a una “nación” (no a un estado). Esta nacionalidad se adquiere espontáneamente simplemente por pertenecer a una nación por el cual no depende del derecho positivo, ni tampoco del derecho constitucional.

El artículo 15° de la Declaración Universales de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una nacionalidad, y a no verse privado arbitrariamente a su nacionalidad, ni al derecho a cambiarla. Es decir que es un elemento fundamental de la vida del individuo, en tanto y en cuanto le permita pertenecer a un grupo, identificarse con este y a la vez otorgarle el ejercicio de sus derechos conforme a las normas jurídicas.

Podemos diferenciar dos tipos de nacionalidad:

- Nacionalidad “a secas” (o sociológica): no depende del derecho positivo sino lo caracteriza por el vínculo que une una persona a una nación, es decir, el sentimiento de pertenecer a una nación.
- Nacionalidad política: Es la situación jurídica con el que el hombre es investido por el derecho positivo del estado en relación al mismo “estado”, según el criterio del derecho vigente (por ej. El lugar de nacimiento, la nacionalidad paterna o la nacionalización). Donde esta nacionalidad es materia que regula la constitución, puede o no coincidir con la nacionalidad “a secas”.

La ciudadanía es una cualidad o condición jurídica del individuo consistente a un status jurídico derivado del derecho positivo y cuyo contenido se ha dado por el ejercicio de los derechos políticos, es decir, la ciudadanía está más relacionada a la posesión de los derechos políticos emanados de la nacionalidad.

Por otra parte se puede afirmar que la Constitución Nacional utiliza como sinónimos a los conceptos de nacionalidad “política” con la ciudadanía, y no plantea diferencia alguna.

Modos de adquisición de la nacionalidad (política):

- Ius soli (Derecho del suelo): se considera a todas las personas nacidas en el territorio, también se los puede denominar nativos o nacionalidad de origen.
- Ius Sanguinis (Derecho sanguíneo): Son los hijos de argentinos nativos que nacen en el extranjero, y que optan de la nacionalidad paterna o materna, también se la denomina nacionalidad por opción.
- Nacionalidad por naturalización: se le otorga al extranjero que peticione la nacionalidad con determinados requisitos para acreditarla.

Ley N° 346 – Ley de ciudadanía y naturalización

La ley 346 fue restablecida en su vigencia después de derogarse la ley 21.795 del año 1978. Por ello la nacionalidad argentina está regulada por medio de la ley 346 y sus normas reglamentarias y suplementarias. En esta norma se establece quienes son argentinos y quienes ciudadanos por naturalización, los procedimientos y requisitos para adquirir la carta de ciudadanía y los derechos políticos de los argentinos. La ley siguió el criterio de la constitución y no diferencio los conceptos de nacionalidad y ciudadanía.

- *De los Argentinos/ De Origen*

Son argentinos:

- Todos los individuos nacidos, o que nazcan en el territorio de la república, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción de los hijos de ministros extranjeros y miembros de la legación residentes en la República.

- Los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país extranjero potaren por la ciudadanía de origen.

- Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República.

- Los nacidos en las repúblicas que formaron parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la emancipación de aquéllas, y que hayan residido en el territorio de la Nación manifestado su voluntad de serlo.

- Los nacidos en ares neutros bajo el pabellón argentino.

- *De los ciudadanos por naturalización*

Son ciudadanos por naturalización:

- Los extranjeros mayores de 18 años, que residiesen en la República 2 años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo.

- Los extranjeros que acrediten ante dichos jueces haber prestado, cualquiera que sea el tiempo de su residencia algunos servicios desempeñados con honradez. Un ejemplo seria ser empresario o constructor de ferrocarril en cualquiera de las provincias, entre otras.

La nacionalidad por naturalización es voluntaria, ya que, el artículo 20 de la Constitución Nacional estipula que los extranjeros no están obligados a admitir la ciudadanía, pero obtiene la nacionalización residiendo 2 años continuos en el país, pudiendo la autoridad acortar ese término a favor de quien lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Esto quiere decir que, no hay adquisición automática ni obligatoria de la nacionalidad para los extranjeros. Es un derecho que se les ofrece a aquellos que desean ejercerlo, pero no es un deber que se les impone.

De los derechos políticos de los argentinos

En la ley 346, más específicamente en el Art. 7 se establece que los argentinos que ya hubiesen cumplido la edad de 18 años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la constitución y las leyes de la república, (los ciudadanos nativos poseen el derecho a votar a partir de los 16 años de edad), es decir que los habitantes nativos de la Nación Argentina después de cumplido los 18 años son ciudadanos argentinos por el hecho de poseer todos los derechos políticos vigentes. En el Art. 8 establece que no podrán ejercer los derechos políticos los naturalizados en países extranjeros; por los que hayan aceptado empleo de gobiernos extranjeros sin permiso previo del congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por los que tengan una pena infamante o de muerte.

La Pérdida de nacionalidad:

- a) La nacionalidad “natural”(ius soli) que impone nuestra constitución no puede perderse, eso significa que ninguna ley puede establecer la pérdida de la nacionalidad.
- b) La nacionalidad “por naturalización” puede estar sujeta a la pérdida por causales razonablemente previstas por la ley.
- c) La nacionalidad por opción (ius sanguinis), a pesar de que se asimile a la nativa, puede estar sujeta a la pérdida porque constitucionalmente no es nacionalidad nativa.

La pérdida de la ciudadanía:

Si no puede perderse la nacionalidad nativa, es imposible crear causales de pérdida de la ciudadanía nativa, pero si se pueden perder los derechos políticos (porque ello no equivale la pérdida de la ciudadanía) tanto para los argentinos nativos como para los naturalizados.

Cuando la nacionalidad por naturalización o por opción (que equivale a la ciudadanía) se pierde, se pierde la correspondiente ciudadanía (que es lo mismo).

La “unidad” de nacionalidad:

Nuestro derecho interno acoge el principio de unidad de nacionalidad, o sea que una persona solo inviste “una” nacionalidad única, en virtud de lo que es nacional por nacimiento, por opción, o por naturalización (argentina) o es extranjera.

La doble nacionalidad

La concurrencia de dos nacionalidades en una misma persona tiene como consecuencia la existencia de un doble vínculo jurídico. La persona con doble nacionalidad es, a un tiempo, nacional de dos países, gozando de la plena condición jurídica de nacionales de ambos Estados. Argentina acepta la doble o múltiple nacionalidad, cuyo generalmente se establecen convenios de doble nacionalidad con otros países o deriva de

tratados internacionales. La única veda constitucional es la que impide que en ellos se prevea la pérdida de la nacionalidad argentina.

Nacionalidad por matrimonio:

No es constitucional el principio de que la mujer casada adquiere la nacionalidad de su marido. Pero con la reforma constitucional de 1994, en el artículo 75 inc. 12 prevé la “opción” en beneficio a la nacionalidad argentina, el cual el cónyuge extranjero elija o no la nacionalidad nativa de la otra parte.

Artículo 75, inc. 12 “in fine” de la CN – Principio Constitucional y régimen legal:

“Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.”

La reforma constitucional de 1994 agregó una nueva atribución: los códigos pueden hacerse en textos unificados o separados. Esto quiere decir que pueden unificarse materias comunes a 2 códigos. En nuestro país el congreso es el que dicta la legislación de fondo. Por este motivo, es la misma para toda la nación.

A las provincias les corresponde dictar los llamados Códigos de Forma, es decir, los códigos de procedimiento judicial que regulan las formas de los juicios, por lo que cada provincia tiene un código procesal diferente. Los códigos de fondo dictados por el Congreso de la Nación son aplicados por tribunales provinciales, también llamados locales, de acuerdo con el procedimiento judicial que cada provincia establezca.

“Los constituyentes de 1853 entendían por principio de nacionalidad natural el sistema de *ius solii* (derecho de suelo): se consideran argentinos los nacidos en el suelo argentino.” Pero otro principio de la nacionalidad es el *ius sanguinis* (derecho de la sangre), por el cual se considera naturales de un país a los hijos de padres naturales de ese país, sin importar el lugar donde hayan nacido, esta es la regla seguida por los países americanos que, como la Argentina, recibían a los inmigrantes, adoptaron el principio de *ius solii*. Con la reforma de 1994, los hijos de argentinos nativos (nacidos en el territorio de la República) que nazcan en el extranjero pueden optar por la nacionalidad argentina.

Régimen constitucional de los extranjeros y su expulsión

Principalmente, la relación de un extranjero con nuestro Estado es: el derecho de entrar al territorio y la admisión por parte del Estado.

El ingreso del extranjero se institucionaliza, mediante condiciones razonables que la ley establece, y con cuya verificación y aceptación se produce la “admisión” con fines de una cierta permanencia (lo cual no excluye algún tipo de control sobre la entrada de extranjeros en calidad de simples “transeúntes”).

La jurisprudencia de la Corte Suprema tiene el control en el ingreso de extranjeros conforme con los preceptos constitucionales, del modo y en la medida que lo requiera el bien común en cada circunstancia. Este derecho de regular y condicionar la admisión de extranjeros no es incompatible con los derechos individuales de la Constitución.

Por su parte, la admisión de extranjeros guarda cierta relación con el tema del asilo de exiliados políticos. Las normas que rigen al asilo político, son diferentes y especiales. El derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto San José de Costa Rica) en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos, de acuerdo al derecho interno de cada estado y a los tratados internacionales (art. 22.7)

En cuanto al derecho de refugiados (como derecho internacional), se refiere a la protección de personas que han debido abandonar su país de origen a causa de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

El ingreso y egreso de extranjeros ya mencionado, se relaciona con la inmigración. Nuestra Constitución implanta una política inmigratoria con las pautas del preámbulo, sumado el pensamiento de Alberdi en la materia. El art. 25 impone al gobierno federal la obligación de fomentar la inmigración y prohíbe restringir, limitar o gravar con impuestos la entrada de extranjeros que traigan por objetivo labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes, es decir que se estimula el ingreso de inmigrantes calificados y útiles para nuestro país.

Los residentes “ilegales” son los que ingresan y permanecen en territorio argentino sin haberse sometido a los controles en territorio argentino sin haberse sometido a los

controles de admisión reglamentarios y razonables, o que se quedan en él después de vencer el plazo de la autorización de permanencia concedida al entrar.

Se les puede negar a extranjeros ciertos derechos como: trabajar, comerciar, ejercer industria, abrir cuenta bancaria, etc., pero no la vida o la salud. Como también, si forman parte de algún juicio, no se les niega el debido proceso ni la defensa o que puedan llamar a sus domicilios o confiscarles la propiedad que posean.

Los residentes “temporarios” son los que han recibido autorización para permanecer legalmente durante un lapso determinado que para permanecer legalmente durante un lapso determinado que cuando termine deben salir del país sino se les renueva la residencia o si no se les reconoce como residentes “permanentes”. Estos, son habitantes porque su permanencia es legalmente regular. El Derecho Judicial permite interpretar que quien ingresa y/o permanece ilegalmente puede bonificar el vicio y adquirir calidad de “habitante”, si acredita buena conducta. Mientras que la expulsión del extranjero dispuesta por el estado, tanto si su presencia es legal como si es ilegal. La facultad de expulsar es paralela a la de impedir la entrada de los extranjeros. Se puede considerar la expulsión, como inconstitucional, porque viola la igualdad civil de derechos que la Constitución reconoce a nacionales y extranjeros, es decir que si un nacional no es expulsable, el extranjero tampoco. (Art. 20y 14)

Se puede dar una expulsión mediante un procedimiento administrativo (no se garantiza el derecho de defensa por lo tanto no se prevé revisión judicial).

Si el extranjero ha entrado ilegalmente al país se le puede otorgar la expulsión a condición de que: se le otorgue al imputado la oportunidad de defensa y prueba; la resolución expulsatoria sea revisable judicialmente; la medida se adopte con inmediatez razonable. Esto se lleva a cabo a raíz de que no pudo llevarse a cabo en el momento del ingreso o admisión. Si el extranjero adquirió la calidad de habitante, luego no puede ser expulsado. El extranjero que después de su radicación legal en el país se ausenta de él, tiene derecho a regresar en calidad de habitante. El extranjero que se naturaliza “argentino” deja de ser extranjero y adquiere nacionalidad argentina, por cuya razón es obvio que su situación no encuadra en el tema expulsión de “extranjeros”.

En cuanto al Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen la misma jerarquía de la Constitución, contienen normas permisivas de la expulsión de extranjeros (art. 22 y 13). Teniendo en cuenta que en el derecho constitucional argentino es inconstitucional la expulsión de extranjeros, hay una disputa entre el derecho interno que lo impide, y el derecho internacional que lo admite.

Actualmente, rige la Ley 25.871: Ley de Migraciones: Título Preliminar política migratoria Argentina; Título I de los Derechos y obligaciones de los extranjeros. Título II de la Admisión de extranjeros a la República Argentina y sus excepciones. Título III del ingreso y egreso de personas. Título IV de la permanencia de los extranjeros. Título V de la legalidad e ilegalidad de la permanencia. Título VI del régimen de los recursos. Título VII competencia. Título VIII de las tasas retributivas de servicios. Título IX de los argentinos en el exterior. Título X de la autoridad de aplicación. Título XI disposiciones complementarias y transitorias.

Además, el lunes 1 de mayo de 2017, el Poder Ejecutivo publicó el **decreto 70/2017**, que modifica la Ley de Migraciones: **impone controles más estrictos para evitar que delinquentes extranjeros operen en el país, y que permanezcan en el territorio nacional pese a tener antecedentes penales.**

La nueva norma (Art. 29) establece que **no podrán ingresar** las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "**delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas**". Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de **terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.**

Conclusión

Tal como mencionamos en la introducción al trabajo, hemos desarrollado las “Instituciones Constitucionales Argentinas” conforme permitirle al lector una eficaz interpretación de la unidad 5.

Desarrollamos la relación del estado argentino con los demás estados y organizaciones internacionales, definimos el concepto de tratados internacionales, aclarando sus características, los diferentes tipos que existen y las etapas que se llevan a cabo para celebrarlos. Analizamos una serie de artículos de la Constitución Nacional relacionados con el tema, explicamos el concepto de nacionalidad, qué tipos existen y las formas de adquirirla, entre otras características, así como también el concepto de ciudadanía, junto con el principio constitucional y el régimen legal. Por último, expusimos el régimen constitucional de los extranjeros en la argentina y su expulsión del país.

En conclusión, a través de nuestras investigaciones, la revisión de bibliografías y diversas fuentes, la conceptualización de palabras claves, el desarrollo de las características y el análisis de determinados artículos de la Constitución Nacional relacionados con el tema en cuestión, podemos decir que la relación que el estado argentino mantuvo y mantiene actualmente con sujetos de carácter internacional es importante para el desarrollo de la política y la justicia del país.

Bibliografía

“Constitución Nacional Comentada” [aut. Andrea M. Orihuela] / Editorial: Estudio S.A.

“Constitución Nacional: Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional” [Información Legislativa y Documental] / Enlace: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=63

“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” [1969] / Enlace: <http://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/glossary/vienna-convention-es.pdf>

“Convención sobre Derechos de Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales” [1986, Información Legislativa y Documental] / Enlace: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/183/norma.htm>

“Estado Constitucional argentino” [2007] / Enlace: http://www.altillo.com/examenes/unl/dereconsti/dereconsti_2007_resumen4.asp

“Instituciones constitucionales en Argentina” [aut. Adriana López] / Enlace: <https://www.gestiopolis.com/instituciones-constitucionales-en-argentina/>

“Ley N°25.871” [2003] / Enlace: http://www.escueladenautica.edu.ar/ESNN_txt/LEY_25871.pdf

“Ley N° 346” [actual] / Enlace: <http://www.buenosaires.gob.ar/registro-civil/normativa/ley-no-346>

“Manual de la Constitución Nacional Reformada (tomo 1)” [aut. Bidart Campos]

“Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto” / *Enlace:* <http://www.mrecic.gov.ar/>

“Nacionalidad argentina” [*actual*] / *Enlace:*
<http://etria.cancilleria.gov.ar/content/nacionalidad-argentina>

“Principios constitucionales, derechos humanos y el sistema penal” [*aut. Carlos Damián Renna*] / *Enlace:* <https://www.nota22.com/noticia/13480-principios-constitucionales-derechos-humanos-y-el-sistema-penal.html>

“Qué dice el decreto de Macri que modifica la Ley de Migraciones” [2017] / *Enlace:*
<http://www.infobae.com/politica/2017/01/30/que-dice-el-decreto-de-macri-que-modifica-la-ley-de-migraciones/>

“Tratados Internacionales” [*actual, Biblioteca del Congreso Nacional*] / *Enlace:*
<http://www.bcnbib.gov.ar/15/Tratados%20Internacionales%20.html>

“Tratado Internacional” [2015, *aut. Barbara Montaner*] / *Enlace:*
http://www.derecho.com/c/Tratado_internacional